



**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO**  
**JUZGADO VEINTISÉIS ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE BOGOTÁ**  
**D.C.**

---

Bogotá D. C., once (11) de mayo de dos mil veintiuno (2021)

<b>RADICADO:</b>	<b>11001-33-35-026-2021-00098-00</b>
MEDIO DE CONTROL:	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
<b>DEMANDANTE:</b>	<b>NELSON FRANCISCO TORRES MURILLO</b>
DEMANDADO:	PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

**ANTECEDENTES**

**NELSON FRANCISCO TORRES MURILLO**, promovió demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, cuyo objeto principal se delimita a la nulidad el oficio No. SG No. 004269 del 06 de junio del 2018, expedida por la Secretaria General de la Procuraduría General de la Nación la doctora Liliana García Lizarazo, notificada el 29 de junio del 2018, mediante la cual resolvió no acceder a la petición de pago del 80% de las diferencias que se ha venido presentando entre las cesantías que devengan los Congresistas y las que devenga los Magistrados de Alta Corte y Procuradores Delegados ante ellos, la cuales deben reconocerse por el rubro de Prima Especial de Servicios consagrado en el artículo 15 de la Ley 4° de 1992, ya que resulta relevante a su vez para la liquidación de los valores tenidos en cuenta en orden de determinar el monto de la Bonificación por Compensación contemplada en el Decreto 610 de 1998.

Una vez estudiadas las pretensiones de la demanda, este Despacho Judicial manifiesta que **NO AVOCARÁ CONOCIMIENTO** del presente asunto, por las siguientes,

**CONSIDERACIONES**

Los artículos 130 y 131 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se encargaron de consagrar las causales generales y especiales de impedimento de los Jueces y Magistrados en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y de establecer el procedimiento en caso de evidenciarse la configuración de alguna de aquellas; los mentados enunciados normativos disponen:

**“Artículo 130. Causales.** Los magistrados y jueces deberán declararse impedidos, o serán recusables, en los casos señalados en el artículo 150 del Código de Procedimiento Civil<sup>1</sup> (...)

**Artículo 131. Trámite de los impedimentos.** Para el trámite de los impedimentos se observarán las siguientes reglas:

1. El juez administrativo en quien concurra alguna de las causales de que trata el artículo anterior deberá declararse impedido cuando advierta su existencia, expresando los hechos en que se fundamenta, en escrito dirigido al juez que le siga en turno para que resuelva de plano si es o no fundado y, de aceptarla, asumirá el conocimiento del asunto; si no, lo devolverá para que aquel continúe con el trámite. Si se trata de juez único, ordenará remitir el expediente al correspondiente tribunal para que decida si el impedimento es fundado, caso en el cual designará el juez ad hoc que lo reemplace. En caso contrario, devolverá el expediente para que el mismo juez continúe con el asunto.

2. Si el juez en quien concurra la causal de impedimento estima que comprende a todos los jueces administrativos, pasará el expediente al superior expresando los hechos en que se fundamenta. De aceptarse el impedimento, el tribunal designará conjuer para el conocimiento del asunto.

(...)

7. Las decisiones que se profieran durante el trámite de los impedimentos no son susceptibles de recurso alguno.”

A su vez el artículo 141 del Código General del Proceso, determina las hipótesis en las cuales los magistrados y jueces de la república, deben declararse impedidos por encontrarse incursos en causales de recusación. En efecto dispone la norma:

**“Artículo 141. Causales de recusación.** Son causales de recusación las siguientes:

1. **Tener el juez,** su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, **interés directo o indirecto en el proceso.”**

Como primera medida, se observa que el demandante ostenta el cargo de Procurador Judicial II.

La parte actora manifiesta en su escrito que, al corresponder la cesantía a un ingreso total anual de carácter permanente, no queda duda que la diferencia que se presenta entre los valores liquidados al Congresista por cesantía y los reconocidos al Magistrado de Alta Corte por el mismo concepto, deben cancelarse por Prima Especial de Servicios consagrado en el artículo 15 de la Ley 4 de 1992, y por ello el demandante solicita que además de la declaración de nulidad del acto acusado, se ordene la reliquidación de sus prestaciones

---

<sup>1</sup> Debe entenderse la remisión normativa al Código General del Proceso.

sociales, teniendo en cuenta la prima antes señalada, ya que resulta relevante a su vez para la liquidación de los valores tenidos en cuenta en orden de determinar el monto de la Bonificación por Compensación contemplada en el Decreto 610 de 1998.

Visto esto, se tiene que el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, estableció dicha prima especial de servicios para algunos funcionarios de la Rama Judicial, así:

*“El Gobierno Nacional establecerá una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico, sin carácter salarial, para los Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, Agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para los **Jueces de la República**, incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten por la escala de salarios de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del primero (1°) de enero de 1993.*

*Igualmente tendrán derecho a la prima de que trata el presente artículo, los delegados departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil, los Registradores del Distrito Capital y los niveles Directivo y Asesor de la Registraduría Nacional del Estado Civil.*

**Parágrafo:** *Dentro del mismo término revisará el sistema de remuneración de funcionarios y empleados de la Rama Judicial sobre la base de la nivelación o reclasificación atendiendo criterios de equidad”.*

De acuerdo con la anterior norma, la demandante en su calidad de Fiscal, solicita que la prima especial sea tenida en cuenta como factor salarial para liquidar sus prestaciones sociales.

De acuerdo con este panorama, es de precisar que si bien lo relativo a la reliquidación de la asignación de retiro de la parte actora con el régimen previsto en la Ley 4 de 1992 y la asignación salarial que devengó como Juez, pueden ser aspectos conocidos por el suscrito, no sucede lo mismo con la inclusión de la Prima Especial de Servicios, pues decidir sobre este último punto, necesariamente implicaría asumir una postura acerca de si dicho estipendio constituye o no factor salarial para todos los efectos.

De ahí el interés directo del suscrito, dado que al ser beneficiario de la prima especial de servicios durante el transcurrir de mi trayectoria laboral en la Rama Judicial, el criterio bajo el cual se adopte una decisión de fondo en este proceso estaría en entredicho, pues el resultado, tendría incidencia directa en la determinación de la base de liquidación de las prestaciones sociales que actualmente devengo, en razón del ejercicio de la función jurisdiccional, y en particular, en el ingreso base de liquidación de la pensión de vejez a la que eventualmente pudiera tener derecho.

En este sentido, para el suscrito es claro que, en su intervención como juez dentro del presente proceso, eventualmente, estaría afectada la neutralidad que debe caracterizar al funcionario judicial en virtud del principio de imparcialidad, debido a la circunstancia antes anotada, de modo que, para preservar dichos lineamientos, es necesario marginarse del conocimiento de este asunto.

Finalmente, manifiesto que radiqué reclamación administrativa por el mismo objeto de la presente litis ante la Procuraduría General de la Nación llevándose a cabo conciliación extrajudicial ante la Procuraduría 146 Judicial II para Asuntos Administrativos, el 8 de marzo de 2021, la cual fue declarada fallida.

De este modo, es claro que el hecho constitutivo de ser destinatarios de la misma prestación laboral compromete mi imparcialidad como Titular del Despacho y administrador de justicia. Circunstancia por la cual considero que el impedimento tiene alcance colectivo por encontrarse los demás Jueces Administrativos bajo las mismas circunstancias de carácter general, no obstante, de lo anterior, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ha considerado necesario, en estos casos, remitir al Juzgado que sigue en turno para resolver lo pertinente.

Empero, con providencia de 12 de marzo de 2021, el H. Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Cuarta – Subsección “A” Magistrado Ponente: **LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO**, consideró que en asuntos con contornos similares al que nos concita, no se da el supuesto del impedimento colectivo, en virtud de la información suministrada por la presidenta de la Corporación en la Sala Plena realizada el 25 de enero de 2021, en la cual se advirtió que no todos los jueces administrativos del circuito judicial de Bogotá, se declaran impedidos.

Ahora, si bien el Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo, en su Artículo 131 numeral primero, dispone que el juez que se declare impedido debe explicar las razones y enviar el proceso al juez que le sigue en turno, para que éste resuelva si es fundado y conoce el proceso, o si no lo es y lo devuelva, debe recordarse que mediante el Acuerdo PCSJA21-11738 del 5 de febrero de 2021, el Consejo Superior de la Judicatura creó dos juzgados administrativos transitorios en Bogotá, para conocer de los procesos generados en las reclamaciones salariales y prestacionales contra la Rama Judicial y entidades con régimen similar, que se encontraban a cargo de los despachos transitorios que operaron en 2020, así como de los demás de este tipo que reciban por reparto.

Así las cosas, y de conformidad con lo dispuesto en el oficio No. 13 del 1º de marzo de 2021, de la Coordinación de los juzgados administrativos de Bogotá, el Juzgado Segundo Administrativo Transitorio recibirá los procesos provenientes de los juzgados 25 al 30 y del 46 al 57.

Por tal razón, y teniendo en cuenta la decisión tomada por el H. Tribunal Administrativo de Cundinamarca en Sala Plena del 25 de enero de 2021, este Despacho Judicial ordenará la remisión del presente proceso, al Juzgado que sigue en turno para resolver lo pertinente.

En mérito de lo expuesto, el **JUEZ VEINTISÉIS ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ – SECCIÓN SEGUNDA**,

**RESUELVE**

**PRIMERO. - MANIFESTAR** el impedimento por parte del suscrito Juez, para conocer del presente asunto, lo anterior con fundamento en el artículo 130 de la Ley 1437 de 2011 (C.P.A.C.A.) y la causal primera del artículo 141 de la Ley 1564 de 2012 (C.G.P.), de conformidad con las consideraciones expresadas en la parte motiva de esta providencia.

**SEGUNDO. - ENVIAR** el expediente al **Juzgado Segundo Administrativo Transitorio de Bogotá**, para que resuelva sobre este impedimento.

**TERCERO. -** Por Secretaría, déjense las anotaciones pertinentes y realícese la respectiva compensación del expediente ante la Oficina de Apoyo Judicial

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

2/



Firmado Por:

**ANDRES JOSE QUINTERO GNECCO**  
**JUEZ CIRCUITO**  
**JUZGADO 026 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO BOGOTA-CUNDINAMARCA**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **86b2ec3fb9a080026cf3aae97e6dad3f32cc80778c5d274984ff9463664f08c6**  
Documento generado en 11/05/2021 01:32:18 PM

Nulidad y restablecimiento del derecho  
Expedientes No. 1100133350262021-00098-00  
Manifiesta impedimento individual

**Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:**  
**<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**